BALEARES

Oportunidad perdida para evitar la segregación del alumnado inmigrante

La Consejería de Educación sorprendió a todo el mundo al anunciar medidas importantes en materia de admisión de alumnos para favorecer una distribución más racional del alumnado procedente de la inmigración y permitir una “impregnación” más racionalizada de este colectivo que supone el 20% de los escolares

EL ALUMNADO inmigrante se distribuye en los centros sostenidos con fondos públicos de forma muy irregular. Así, la red de centros públicos, que agrupa el 65% del total, escolariza el 80% del alumnado recién llegado, mientras que la red de escuelas concertadas sólo escolariza el 20%.

En la escuela pública, un buen puñado de centros acoge a más de un 50% de alumnado inmigrante. Incluso en algunos se alcanza un 80% con cerca de 30 lenguas distintas entre el alumnado. También se aprecia este fenómeno en la red de centros concertados, aunque de manera más marcada en un grupo de escuelas que concentran un porcentaje de alumnos recién llegados superior al 60%.

Esta segregación del alumnado responde a los criterios de acceso adoptados por los gobiernos del PP y a la medida de las familias con cierto poder adquisitivo, que no querían ver a sus hijos “mezclados” con compañeros de escuela provenientes de determinados países y culturas diferentes.

Antes de que se aplicaran estos nuevos criterios, muchas familias de Palma habían hecho lo posible para cambiar de residencia o de lugar de empadronamiento de sus hijos, con el fin de lograr plazas escolares en centros concertados -y en menor medida públicos- donde la presencia de población inmigrante era casi testimonial.

La fórmula empleada para favorecer a estas familias repercutió en la reducción de ocho distritos de escolarización de Palma a tres, ofreciendo a la vez más puntuación a las familias que con mayor antigüedad se encontraban empadronadas en estos tres grandes distritos.

Así, los padres de escolares recién llegados se enfrentaban con menor puntuación que antes a la hora de inscribir a sus hijos a los centros más solicitados, dejando el paso libre a las familias más acomodadas.

Las consecuencias son conocidas; si hasta aquel momento determinadas escuelas públicas y concertadas concentraban la escolarización de población inmigrante en cada uno de estos ocho distritos, ahora este efecto se ha agravado con la acogida de más escolares recién llegados y de barrios cada vez más distantes.

Ahora, cuando finalmente la Consejería, en manos del PSIB, ha querido racionalizar la escolarización de la población inmigrante, UM hace su “chantaje” y logra profundizar en un modelo de escuela con más desigualdad.

El descalabro se hace patente con la eliminación de las tres plazas que se reservaban hasta septiembre para poder escolarizar al alumnado de incorporación tardía y con nece-

sidades educativas específicas, colectivo compuesto mayoritariamente por escolares inmigrantes. Esta eliminación no permitirá una distribución más racional del alumnado inmigrante entre los centros sostenidos por fondos públicos.